

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

|                  |  |
|------------------|--|
| PROCESO          | Ordinario                                |
| DEMANDANTE       | Gloria Inés Álzate Ruiz                  |
| DEMANDADO        | AFP Porvenir S.A. y Colpensiones         |
| PROCEDENCIA      | Juzgado 011 Laboral del Cto. de Medellín |
| RADICADO         | 05001 31005 <b>011 2019 00380</b> 01     |
| INSTANCIA        | Segunda                                  |
| PROVIDENCIA      | Sentencia Nro. 203 de 2023               |
| TEMAS Y SUBTEMAS | Ineficacia de traslado afiliada          |
| DECISIÓN         | Confirma y modifica                      |

En la fecha, **treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Luz Patricia Quintero Calle y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la **AFP Porvenir S.A.**, y el grado jurisdiccional de consulta para **Colpensiones**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido contra esas entidades por **Gloria Inés Álzate Ruiz**. Radicado único nacional 05001 3105 **011 2019 00380** 01.

Auto

Con fundamento en la documentación allegada a esta instancia, se reconoce personería a la abogada **Daniela Echeverri García**, para asumir la representación judicial de **Colpensiones**.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **25**, que se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

Ruega la demandante, de manera principal, la declaratoria de ineficacia de la vinculación a la AFP Porvenir S.A., y subsidiariamente, la nulidad de tal acto, y como consecuencia, se reactive su pertenencia al RPM, ordenándose al fondo privado restituir a Colpensiones la totalidad de los aportes, con la rentabilidad y el porcentaje de administración debidamente indexados; la entidad pública recibirá tales valores y actualizara la historia laboral. Pide también condena en costas.

En sustento de ello afirma que, **nació el 21 de noviembre de 1966**, se vinculó al RPM el 26 de marzo de 1987, en 1999 se trasladó a Porvenir S.A., advirtiendo que previó a ello la referida sociedad **NO** *le brindó una asesoría clara, comprensible, completa acerca del tema pensional toda vez que NO le explicaron ni le brindaron información respecto las características del régimen de ahorro individual, ni las diferencias respecto al régimen de prima media con prestación definida, esto es NO dieron a conocer las diferencias de los regímenes, NO le explicaron ni le informaron las modalidades de pensiones que tiene el RAIS, como tampoco le explicaron, ni le informaron que la pensión estaba supeditada al capital acumulado y los rendimientos, tampoco le explicaron ni le informaron las consecuencias si NO acumulaba el Capital mínimo, NO le explicaron ni le informaron que la edad de los beneficiarios incide en el reconocimiento de la prestación; PORVENIR NO le explicó NI le informó la importancia del **RETRATO** (sic) ni de manera verbal ni por escrito y que tenía derecho al mismo; PORVENIR NO le explicó los riesgos que se podían presentar si NO acumulaba el capital necesario para una pensión del 110%, lo que puede traer como consecuencia que el derecho a la pensión por mala asesoría se torne en RENUNCIABLE; PORVENIR NO la asesoró ni le informó sobre que es un aporte voluntario; NO le explicaron ni le informaron que en caso de escoger una pensión anticipada al redimirse... el bono disminuiría su valor lo cual tendría un impacto en el valor de la mesada, tampoco la ilustraron sobre la fecha de redención del bono, ni le realizaron proyección o simulaciones de pensión, por lo que no se*

le dio un buen consejo. Estima entonces que no fue advertida sobre ventajas y desventajas de su movilidad, ni se le puso en contexto frente a la fecha límite para retorno al régimen público, y tampoco Colpensiones le entregó la debida asesoría, tornándose su cambio ineficaz.

En auto del **1º de agosto de 2019**, se **admitió** y ordenó dar trámite a la acción. Enteradas en legal forma de tal actuación las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación así:

**Colpensiones**, de los hechos tiene como ciertos, la fecha de nacimiento de la demandante y la afiliación al RPMPD el 26 de marzo de 1987. Los demás supuestos no le constan o son apreciaciones de la parte actora. **Resistió** las pretensiones y formuló las **excepciones** de: inexistencia de la obligación y falta de derecho para pedir, inoponibilidad jurídica para cumplir las obligaciones peticionadas, buena fe, prescripción, innominada, compensación e imposibilidad de condena en costas.

**AFP Porvenir S.A.**, frente a los hechos expresa que no son ciertos o no le constan. Explica que la actora suscribió formulario de afiliación a esa sociedad el 09 de junio de 1999, con efectividad a partir del 1º de agosto del mismo año. Que la movilidad entre regímenes se dio en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la fecha, efectuándose la debida asesoría, sin que se exigiera proyección pensional, máxime que cualquier simulación se daría con base en datos presuntos. Que el deber de guardar soportes documentales surgió con los Decretos 2241 y 2555 de 2010, 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2014, **Se opuso** a las pretensiones y como medios tendientes a enervarlas propuso los de: prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

La primera instancia concluyó con **sentencia** dictada por el Juzgado Once Laboral del Circuito el 13 de septiembre del año que corre, descartando la prosperidad de

las excepciones propuestas. Declaró la ineficacia del traslado de la actora a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías hoy Porvenir S.A. el 12 de noviembre de 2001, por la no acreditación del deber de información en los términos de la regulación vigente para tal data, ello con sustento en jurisprudencia especializada, citando apartes, entre otras, del pronunciamiento SL1055-2022; siendo la consecuencia que para todos los efectos legales ha pertenecido al RPMPD. Condenó a la AFP Porvenir S.A. a reintegrar a Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, las sumas del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales a que hubiere lugar, así como los gastos de administración, las comisiones, los porcentajes destinados a conformar el fondo de garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales, con cargo a sus propias utilidades, todos debidamente indexados, adjuntando relación discriminada de conceptos con detalle pormenorizado de ciclos, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Ordenó a Colpensiones recibir tales sumas, activar la afiliación de la promotora del trámite en el RPM, sin solución de continuidad. En el evento de no recurrirse, ordenó consulta para el fondo público y gravó con costas al fondo privado.

La apoderada de **Porvenir S.A.**, interpuso **recurso de apelación**, manifestando desacuerdo total con la declaratoria de ineficacia, ya que a su juicio no existen razones para ello, toda vez que la AFP en 1999 cumplió con todas las obligaciones vigentes para ese momento, y si bien de acuerdo consideraciones juez no se allegaron pruebas, no era requisito el soporte documental, la normatividad solo exigía brindar información verbal y la suscripción de formulario de afiliación, documento válido que contiene la manifestación de la actora, quien además dispuso siempre de los canales de comunicación, sin que manifestara queja o inconformidad relacionada con su situación, por lo que no se puede desconocer un acto que acató los requisitos de ley y respetó la voluntad de la afiliada, al no configurarse la ineficacia también se debe revocar la condena a la devolución de aportes.

Si eventualmente se deja en firme la decisión, pide exoneración de la devolución de gastos de administración, seguros previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión mínima indexados, ello porque con fundamento en el artículo 20 de la Ley 100, tanto los fondos privados como el público deben efectuar tales descuentos, estando destinados los gastos de administración a gestionar los recursos de la cuenta de ahorro individual, con lo que se cumplió, generándose rendimientos allí abonados; el seguro previsional fue girado a una aseguradora, sin que se encuentren en poder de la AFP, por lo que no es posible su restitución. En cuanto a la indexación busca resarcir detrimento del dinero, y se compensaría con los rendimientos financieros, por lo que ordenar los dos conceptos implica doble condena en contra de Porvenir y un enriquecimiento sin justa causa para Colpensiones. También se debe revocar la condena en costas, al estar su actuar sujeto a la buena fe y a la normatividad que regulaba el tema.

De la etapa de **alegaciones** ante esta instancia hizo uso la apoderada judicial de **Colpensiones**, reiterando que en los autos no quedan acreditados los supuestos para la prosperidad de las pretensiones, por lo que deben desestimarse y en el evento de ratificarse el fallo de primer grado, disponer la restitución integral de recursos debidamente indexados, esto con fundamento en precedente especializado.

El apoderado de **Porvenir S.A.**, insiste en la revocatoria de la decisión con fundamento en los argumentos expuestos a lo largo del trámite, pues no se superan las exigencias para la declaratoria de la ineficacia petitionada, y tampoco para la orden en cuanto a restituciones y condena en costas.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones:**

Como hechos debidamente acreditados se tienen: la fecha de nacimiento de la demandante, **21 de noviembre de 1966**; su pertenencia al RPMPD entre el **25 de marzo de 1987 y el 31 de julio de 1999**, aportando un total de **599,86 semanas**; su traslado a la AFP Porvenir S.A. con formulario suscrito el **09 de junio de 1999, efectividad a partir del 1º de agosto del mismo año**, posterior movilidad dentro del régimen privado a la AFP Horizonte el 12 de noviembre de 2001, y por cesión por fusión nuevamente pasó a Porvenir S.A. a partir del 01 de enero de 2014. En historia laboral generada el 24 de abril de 2019, adjunta al escrito de demanda, registra un total de **1.223 semanas en toda la vida laboral**.

De acuerdo con el recuento realizado, los argumentos de la apelación y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de la ineficacia de la vinculación de la actora a Porvenir S.A. en junio de 1999 y su posterior tránsito entre administradoras en el mes de noviembre de 2001, y como consecuencia de ello, a su inmersión automática en el RPM, con las correspondientes restituciones económicas, los conceptos que estas comprenden, si se debe ordenar o no su actualización mediante el mecanismo de la indexación. También se emitirá pronunciamiento frente a la condena en costas a la AFP Porvenir S.A..

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está antecedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas, que el cambio debe estar precedido de la debida información y transparencia, **para el caso concreto** como los formularios se suscribieron en los años 1999 y 2001, se estaba en la

primera etapa de la regulación, entre otros arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y por tanto, el contenido mínimo estaba circunscrito a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, y** suponía el análisis de la situación particular de cada afiliado ante el sistema; sin que obre prueba de la debida ilustración por parte de la **AFP** sobre el funcionamiento, diferencias, ventajas, desventajas, forma de liquidar y modalidades de pensión en el RAIS, entre otros, bajo las reglas de la normatividad vigente para tal calenda, ni del debido acompañamiento durante el tiempo en que ha estado allí, **al punto que al emitirse pronunciamiento frente a los hechos que sustentan la acción, se dice que no le consta la fecha de nacimiento, ni la afiliación previa al régimen de prima media, a pesar de estar referenciado en el formulario en que se funda la defensa y en los documentos adosados como soporte de sus dichos, datos por demás relevantes para los estudios requeridos,** sin que obre entonces medio de convicción frente al particular y sin que tal omisión se subsane por el transcurso del tiempo.

Y es que no basta afirmar que al ser el sistema de pensiones de carácter público toda su regulación es legal y por ser así se presume su conocimiento por los afiliados, pues de un lado, se está ante un tema técnico que requiere manejo especializado, y por otro, es clara la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, entre otras en sentencia SL2484-2022 cuando indica:

*... le corresponde a la administradora de pensiones acreditar el cumplimiento del deber de información, **pues exigir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que no haber recibido información suficiente corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación** [1] (CSJ SL1452-2019, reiterada en CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4426-2019 y CSJ SL4806-2020).*

***Asimismo, porque la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad quien debe observar la***

***obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.***

***Y es que no es razonable invertir la carga de la prueba contra la otra parte de la relación contractual, toda vez que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto del afiliado lego, a tal punto que la legislación considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros (artículo 11, literal b) de la Ley 1328 de 2009).*** Negrillas fuera del texto original.

Y en la SL1197-2021, señala:

***Así lo es, pues en su disertación llega al punto de postular que era la accionante la que debía tener conocimiento de aquellos presupuestos, contrario a ello, debió el Colegiado considerar que el deber de información debió ser veraz, oportuno e insoslayable en este campo de la seguridad social. Las AFP tienen la imperativa obligación de brindar una asesoría suficiente, y por ello, si el afiliado alega que no fue así, como aquí ocurrió, el Tribunal debía entonces contraer su atención en elucidar si ese deber se satisfizo o no, con pruebas que lo demuestren de forma contundente, más aún, si aquella está, tal y como se indicó en el precedente transcrito, en mejor posición que los afiliados, para demostrar esas circunstancias.*** Negrillas extra texto.

Ni del formulario de afiliación se infiere la completa ilustración, así se asevera en sentencia SL4322-2022:

***Se sigue de lo anterior que el simple diligenciamiento del formulario no supe en manera alguna el deber de información, como erradamente parece haberlo entendido el Tribunal y, mucho menos, con el nivel de calidad que la jurisprudencia ha venido exigiendo, ni resulta ser demostrativo de haberse satisfecho en debida forma el mentado deber (CSJ SL1741-2021 en la que se memoraron las sentencias CSJ SL1421-2019; CSJ SL4964-2018 y CSJ SL19447-2017), ni la suscripción de ese preimpreso remueve la obligación que le asistía a las AFP de cumplir con el requisito de brindar la debida información y de probarlo en el proceso, así como tampoco lo hace la aceptación en el interrogatorio de parte del demandante de haber recibido una información, pero no con las características y profundidad debidas.***

Y en la misma providencia se expone que no es posible afirmar:



***Que no se diga, tampoco que para la época en que el demandante se trasladó, la selección del régimen pensional no tenía relación con el monto de la pensión, pues lo que se espera al momento del traslado no es precisamente que se le informe el valor futuro de la prestación, sino que se le explique que aquella depende del capital acumulado en la cuenta individual, por lo que, las AFP como expertas en el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, cuentan con los soportes técnicos, estadísticos y actuariales para realizar proyecciones del capital que en el tiempo puede acumular el afiliado para acceder a su derecho pensional, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno al momento del traslado, como la edad, sexo, nivel de ingreso, persistencia en la cotización, etc; información con que cuenta la AFP por encontrarse registrada en el formulario de afiliación y en la historia laboral del afiliado.***

*Así mismo, advierte el juzgador de alzada que la solicitud del demandante de retornar a Colpensiones no se realizó dentro de los plazos previstos, según las sentencias de la Corte Constitucional que citó en la providencia; **sin embargo, resultaría ser un desaguizado centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Horizonte hoy Porvenir SA, con lo cual, se desdibujaría por parte del Colegiado de instancia el pedimento efectuado desde el escrito inaugural (CSJ SL1475-2021).*** Negrillas intencionales.

Ni se pueden invocar actos de relacionamiento como sustento de saneamiento, en el mismo proveído se dice sobre el particular:

*De la misma manera, encuentra la Sala que tampoco le asistió la razón al Tribunal al sostener que actos posteriores al traslado de régimen pensional efectuado en el año 2000, de aparente asentimiento con el RAIS, o las calidades personales o profesionales del demandante acumulados a lo largo de su vida, per se, convalidaron de alguna manera el hecho de que al momento de la afiliación la AFP no cumplió con el deber que le competía, como se ha explicado a lo largo de esta providencia (CSJ SL 3349-2021).*

Y en sentencia SL1055-2022, se argumenta:

*Pues bien, como se explicó en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta índole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones está en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona contó con información suficiente para tomar esa decisión. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se trasladó entre fondos privados o no retornó a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jurídico del traslado de régimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jurídico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.*

***De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongestión de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022. Nótese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirtúa el incumplimiento del deber de información y además ubica la discusión en actuaciones que estarían respaldadas en un acto jurídico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.***

*Justamente lo anterior explica que la acción para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como también lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin más agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de régimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.*

***Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casación Laboral de esta Corte, y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.***

Reiterándose en la SL1442-2021 que memoró el fallo CSJ SL12136-2014, que la información precisa, es un elemento esencial para pregonar ***libertad*** en la toma de la decisión, lo cual supone, necesariamente, el conocimiento de las consecuencias positivas y negativas de su acogimiento, acarreado su inobservancia **la ineficacia del cambio de régimen en los términos de los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que:**

***... las cosas vuelven a su estado anterior, de manera que la administradora tiene que asumir los deterioros del bien administrado, pues la ineficacia se declara como consecuencia de la conducta del fondo, al haber incurrido en la omisión de brindar la información adecuada, oportuna y suficiente al afiliado, quien tenía derecho a recibirla, no de forma gratuita, sino con cargo a la comisión de administración de aportes obligatorios y comisiones por buen desempeño que se descuentan de la cotización y de su ahorro, deducción autorizada por el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 53 de la Ley 1328 de 2009 y que permite el literal q) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer: Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente Ley.***

***Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por***

***los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020. Reiterada en la SL843-2022).***  
Negrillas intencionales.

Por ser el precedente vigente, es el acogido por esta Sala de Decisión, **por lo que se confirma la declaratoria de ineficacia de la vinculación de la demandante al RAIS y la movilidad entre administradoras, punto en que se aclara el fallo de primer grado.**

En lo atinente a los rubros a devolver, su actualización mediante el mecanismo de la indexación, y **la obligación de la AFP de asumir lo descontados por gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima con su propio patrimonio**, surgen, entre otras, a partir de las sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021** reiteradas, entre otras, en las **SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022, SL1055-2022, SL2484-2022, SL4322-2022, SL554-2023 y SL1084-2023**, sin que sea una decisión caprichosa, **pues como ya se advirtió, se acata el precedente vertical reiterado en más de 3 providencias que constituyen doctrina probable**, y no se cuenta con elementos para superar las subreglas establecidas por la jurisprudencia constitucional y especializada para apartarse del mismo, esto es:

(i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto, (ii) cambios normativos, (iii) transformaciones sociales que obligan a dar una nueva mirada a determinada cuestión, dado que los jueces deben adaptarse a las exigencias que impone la realidad y reconocer la evolución del derecho, o (iv) divergencias hermenéuticas fundadas en la prevalencia de mejores y más sólidos argumentos que permiten un desarrollo más amplio de los derechos, libertades y garantías constitucionales.

Tampoco tiene acogida la tesis de enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES o de la demandante, ni de doble condena, ya que se trata de la reivindicación de unas sumas que integran la cotización y que deben dirigirse a la

administradora a la que ha pertenecido siempre sin solución de continuidad, máxime que fue la conducta de las AFP la que generó la ineficacia aquí declarada.

Se precisa que si bien es cierto en los fundamentos de la demanda se afirma que una de las razones para promover esta acción es obtener una mejor mesada pensional, ello se encuentra acorde con el calificativo irrenunciable de la seguridad social, que no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que desde un enfoque material, busca la satisfacción en su totalidad a fin de que los derechos e intereses objeto de protección sean reales y efectivos; *en este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada. Ver sentencias SL8544 y SL 13430 de 2016.*

Sumado a que sobre el particular la Sala de Casación Laboral en providencia SL1055-2022, dijo:

***Ahora, si bien en el presente asunto uno de los argumentos del accionante fue el relativo a demostrar que su pensión en prima media sería más favorable que en el RAIS, esto de ningún modo debe permitir desviar la atención a lo importante, esto es, verificar si al momento del traslado efectivo el afiliado accedió a una información clara y precisa sobre las ventajas, desventajas y riesgos de cada régimen en los términos explicados. Y tampoco difumina lo anterior el hecho de que la persona no haya retornado a prima media en los términos de ley, pues se reitera, lo que concierne a estos asuntos es constatar el obedecimiento de dicho deber legal de información, independientemente de que la persona tenga o no aquella posibilidad legal de retorno.***

No se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, sino imponiendo la sanción de*

ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección al momento de la movilidad del Iss al fondo privado, en los términos del literal b) de la misma norma, en concordancia con los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, **decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida**, pues con el traslado íntegro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse mantenido la permanencia en el fondo público.

En lo atinente a **la condena en costas**, en la que se incluyen las agencias en derecho, al ser una simple consecuencia procesal del ejercicio de la acción o de la excepción, se traduce en una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019), por lo que es procedente **confirmar las de primer grado y por el resultado adverso del recurso**, también se imponen en esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A.


En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **modifica** la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Gloria Inés Álzate Ruiz**, contra la **AFP Porvenir S.A. y Colpensiones**, para indicar que se declara la **ineficacia de su tránsito** al RAIS a través de **Porvenir S.A. con formulario suscrito el 09 de junio de 1999**, y su posterior movilidad a **Horizonte S.A. el 12 de noviembre de 2001**, sociedad esta última que fue objeto de **cesión por fusión a Porvenir S.A. el 01 de enero de 2014**, y en la que actualmente continua la actora.

**En lo demás confirma.**

**Las costas** en esta instancia corren a cargo de la **AFP Porvenir S.A.**, a quien se desata adversamente el recurso de apelación, las agencias en derecho a favor de la actora se gradúan en la suma de **\$1.160.000,00.**

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por secretaria **por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**